

Instituciones Democráticas y Países Subdesarrollados

Por FELIKS GROSS

De Brooklyn College. Ciudad Universitaria de Nueva York, Estados Unidos de América. Colaboración especial para la *Revista Mexicana de Sociología*, vertida del inglés por Óscar Uribe Villegas.

El proceso de emancipación de las naciones tiene una tendencia histórica que se mueve de la esperanza a la desilusión. El cambio súbito, que ha acompañado generalmente a la emancipación, suele producir cierto grado de desorganización. La emancipación de muchas áreas coloniales, especialmente las de África y ciertas partes de Asia, se vio acompañada de un rápido deterioro de las condiciones sociales y económicas, y de un caos político. La rivalidad de las grandes potencias en dicha área dirigieron los designios de expansión de algunas de las naciones menores que recientemente se habían establecido. El neo-imperialismo de los antiguos y de los nuevos estados totalitarios (sobre todo de la China comunista) fue y sigue siendo, por supuesto, un factor de dicho desorden. Además, las naciones postcoloniales tienen problemas propios, y la desintegración también es un resultado de desarrollos internos.

El problema es complejo: es tanto doméstico como internacional. Nuestro enfoque general del mismo —por otra parte— no ha sido, a pesar de todo, suficientemente empírico (empírico en sentido sociológico) y aunque necesitamos algo más que el enfoque empírico, éste constituye nuestra necesidad principal. Necesitamos un enfoque empírico que pueda ser trabajado, y también necesitamos objetivos claros, hacia los que podamos ser guiados por principios humanistas y democráticos.

Empíricamente, puede observarse que, con frecuencia, las naciones recién emancipadas han tomado en préstamo instituciones políticas que no van bien con las condiciones sociales nativas y con las divisiones tribales, en cuanto no tienen una contrapartida en las instituciones sociales, en las cos-

tumbres y en los valores políticos de las nuevas naciones las cuales con anterioridad, fueron, en ocasiones, tan sólo tribus asociadas laxamente.

Si hemos de buscar el logro de objetivos humanistas, debemos señalar que las instituciones políticas operables deben encajar en el patrón cultural de la sociedad, en su estructura social, en los sistemas de valores y en el conjunto de sus ideales religiosos y educativos. Al mismo tiempo, deben prevenir un cambio rápido y no violento, del tipo de los planes económicos que abarcan tres, cinco o siete años. El desarrollo político (que es una condición de desarrollo económico) puede necesitar —también— una planeación de amplio alcance, y requiere que se reconozcan diferentes etapas, a modo que el avance de un estadio político al siguiente, y de uno relativamente simple a uno más complejo se haga con poca ayuda exterior en el asunto difícil del gobierno.

El proceso de emancipación es, por supuesto, una especie de revolución espontánea. Una vez que una nación gana la independencia no hay tiempo para discutir; hay sólo una necesidad inmediata de traducir esa independencia en una forma política ya existente, lista para usarse. Las instituciones democráticas bien desarrolladas que pueden tomarse en préstamo, por haber sido cortadas para sociedades muy diferentes en su estructura socio-económica y para diferentes condiciones políticas, pueden resultar insuficientes para responder a las necesidades de las nuevas naciones. La experiencia general muestra cómo han sido rotas esas instituciones políticas superficialmente asimiladas, al menos en ciertos países postcoloniales, lo cual evidencia dificultades obvias. Las instituciones políticas diferentes no resolverán el problema, pero algunas de ellas, pueden reducir las tensiones y presiones. No sugerimos un retorno a un gobierno tribal tradicional, a sistemas autoritarios o al mantenimiento del *status quo* de las viejas divisiones clásicas. Lo que sugerimos es que, mediante una ayuda adecuada del poder colonial “que se bate en retirada” (como en el caso de muchas colonias británicas) o gracias a la ayuda de organizaciones regionales internacionales o —finalmente, pero con no menos importancia— de las agencias apropiadas de las Naciones Unidas (todas en dependencia de las condiciones locales), deben de establecerse instituciones basadas en los principios fundamentales de los derechos civiles, de la democracia política y económica, pero ajustados a las necesidades actuales y a los presentes niveles de desarrollo de los países de que se trata. Esto puede requerir, por lo menos en el estado inicial, patrones distintos de la simple proyección de los patrones y constituciones occidentales. Las instituciones políticas deben tener un

soporte adecuado en una base social —y podríamos decir sociológica— a más de tenerlo en la económica.

En algunas partes de Africa, las nuevas naciones se formaron sobre la base de divisiones administrativas arbitrarias, que fueron resultado de las conquistas coloniales. En otros, las lealtades dominantes son, aún, lealtades tribales, y la conciencia nacional o es débil o se encuentra limitada a estrechos estratos sociales educados. Además, si aceptamos como un axioma el que las mayorías políticas —mayorías en una dada “arena política”— que apoyan la misma jefatura e ideología son gobernables, corremos de nuevo el riesgo de que al proyectar sobre otras toda una era de experiencia del área cultural occidental, creamos que todas las mayorías son gobernables bajo un sistema parlamentario que ya se ha puesto a prueba. Una nación de antigua cultura, como Viet Nam del Sur, proporciona evidencias de las dificultades; especialmente, da testimonio del rompimiento de las instituciones democráticas occidentales, bajo la presión interna y externa.

De hecho —con muy pocas excepciones—, es muy extensa la cadena de dictaduras militares que abarca Mesorienté, Africa y las costas de Asia. En algunos de los países de estas zonas, el proceso de nacionalización se encuentra dominado por los militares y se orienta hacia su expansión política y militar más que hacia el mejoramiento general de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores y del campesinado. Los latiguillos socialistas se han empleado ampliamente; pero, las condiciones económicas de la población no han mejorado, y en muchos países se deterioraron mucho. La libertad no se extendió, los dirigentes de la oposición fueron encarcelados, los nuevos gobernantes se convirtieron en presidentes vitalicios, y se autodenominaron “benefactores”. Es el proceso de una explotación doméstica nativa que puede llegar a ser tan mala como la extranjera, pues los dictadores nativos disponen de una racionalización fácilmente aceptable de su poder de legitimación para sus acciones (en términos de nacionalismo y patriotismo).

Si bien en el momento en que se produjo la gran revolución de los viejos países coloniales, el enfoque fue más bien tradicional, en nuestros días la teoría política moderna no puede separarse ya de los problemas sociológicos y económicos. Un método integrado puede sugerir ahora la forma de descubrir mecanismos propios y constructivos capaces de expresar las fuerzas sociales dinámicas. Necesitamos —además— un espíritu más inventivo y más imaginativo en la ciencia política, en la planeación política y aun un enfoque pragmático, práctico, de los problemas. Con tal enfoque, pueden desarrollarse nuevas instituciones; puede inventárselas, a modo de que estando enraizadas en la democracia —por una parte— resulten —por otra—

adecuadas para los diferentes sistemas valorativos y los diferentes patrones étnicos. Estas nuevas instituciones pueden requerir medidas específicas que permitan un cambio y un crecimiento continuos, y su operación debe facilitar también (e incluso propiciar) tales cambios sociales. Especialmente, deben estimular cambios en las costumbres, en los valores nativos y en las instituciones; cambios capaces de permitir el avance y el desarrollo económico de las instituciones políticas libres.

Sin un cambio progresivo de las instituciones y de los valores nativos, el progreso social y la modernización son imposibles. De este modo, el proceso de cambio social es uno de interdependencia o causación mutua entre esas variables principales. Quizás haya llegado el tiempo de descubrir o inventar nuevos tipos de instituciones, enraizadas —claro está— en valores políticos como la democracia, la libertad individual y la justicia social, pero mejor adaptados a sociedades de diferentes culturas, si las instituciones que fueron tomadas en préstamo por ellas no resultaron maniobrables. Pensamos aquí, sobre todo, en una especie de institución de transición, que conduzca finalmente a instituciones democráticas totalmente desarrolladas. No es éste un problema puramente jurídico que pueda resolverse por hábiles jusconstitucionalistas, ya que si no es difícil delinear en el papel nuevas constituciones, o trazar planes políticos, es difícil desarrollar sistemas políticos manejables y libres; sistemas basados en un uso mínimo de la compulsión, y enraizados, sobre todo, en el consenso. Tales instituciones asegurarían un alto grado de continuidad, esencial para un desarrollo social ordenado. La aparición o crecimiento de tales instituciones requiere, por supuesto, un clima político y social adecuado, así como una distribución adecuada del poder político y económico. La formulación y construcción apropiadas de tales instituciones también requieren habilidades adecuadas. Estas habilidades, pueden ser producto de la cooperación de juristas de amplia mentalidad, de sociocientistas, antropólogos, sociólogos, economistas y politólogos que estén de acuerdo en un sistema limitado de valores o de objetivos y tengan una orientación pragmática hacia los problemas sociales.

¿Quién proporcionará esos consejos? Una organización internacional puede dar la respuesta, y, en ciertos casos la más adecuada puede ser una organización regional. ¿Qué tanto cambio puede instituirse? El concepto de estadios o etapas puede ser útil aquí en su aplicación práctica, pues tal cambio básico requiere de una estrategia apropiada, y una estrategia de alto alcance requiere una división en estadios progresivos, con objeto de asegurar un avance gradual de las formas y funciones más simples a las más complejas. Gran Bretaña ha aplicado tal estrategia en la mayoría de sus áreas coloniales aparentemente ha tenido éxito: la transición se ha pro-

ducido en ellas ordenadamente y con éxito, a excepción de unos cuantos casos en que han aparecido dictaduras virtuales y gobiernos inestables. Esta experiencia es importante, significativa. Por un método de estadios, una nación emancipada puede moverse hacia formas políticas avanzadas de democracia, en una forma pragmática, en busca de respuestas y soluciones para estos problemas. Tales cambios pueden requerir —incluso— tipos nuevos o adicionales de legitimación de poder: en muchos casos, en dichas naciones emergentes, la voluntad general, base de la legitimidad democrática, no existe en el sentido de “mayorías” definidas, identificables, informadas. La independencia nacional, en sentido decimonónico es, ahora, un mito social. Todas las naciones del mundo son interdependientes; la soberanía nacional se encuentra limitada por los sistemas internacionales, sin los cuales no puede existir actualmente una nueva nación. De hecho, una nueva nación no es totalmente independiente, justamente en la misma forma en que nadie es independiente en la moderna sociedad de hoy. Todos dependemos de los demás, y dependemos —también— de la medicina moderna, de la tecnología y la ciencia modernas. Una nación nueva, emancipada, depende de los países más avanzados en cuanto a su asistencia médica así como en lo que se refiere a ayuda económica y técnica. La emancipación, si es que significa algo, debe significar responsabilidad en términos tan simples como los de proporcionar a la nación condiciones sanitarias, agua potable, protección en contra de las enfermedades endémicas (para mencionar sólo unas cuantas obligaciones sociales elementales). En casos en los que no existe una opinión pública general y un denominador común (debido a la falta de información y a lo bajo de los niveles educativos, a las formas desorganizadas o inadecuadas de organización social), una nueva legitimidad, derivada de las organizaciones internacionales podría substituir, en caso dado, *en un estadio inicial*, la legitimidad basada en la teoría de la voluntad general, hasta tanto pudiera establecerse alguna especie de opinión pública y de decisión democrática. Aquí, de nuevo, la estrategia de los estadios puede permitir, tras un cierto periodo —de entre 5 y 10 años— un movimiento hacia un nuevo nivel político y administrativo, basado en la legitimidad derivada de un plebiscito, de la voluntad de la mayoría, a más del reconocimiento internacional.

Hemos sugerido aquí algunas líneas generales de aproximación, que en ninguna forma son completamente nuevas. Lo que hemos llamado “estrategia de los estadios” ha sido aplicado con éxito por naciones coloniales que ven hacia adelante, en su política de emancipación. La legitimidad internacional, actualmente, está, también, en un estadio de continuo desarrollo. El continente americano y las providencias de la Organización de los

Estados Americanos son, en este respecto, instructivas. Podemos descubrir aquí los principios de tal filosofía. La necesidad de instituciones políticas ajustadas a los patrones culturales nativos es —por supuesto— una consecuencia de lo que hemos aprendido del estudio contemporáneo de las sociedades, gracias a las contribuciones de la antropología y la sociología. De ahí que no deba extrañar el que los actuales programas de asistencia técnica empleen ya varios expertos en ciencias sociales. El problema requiere de un esfuerzo más consciente o una utilización más adecuada y práctica de las ciencias sociales; de aproximaciones pragmáticas a esos cambios revolucionarios.

La orientación general presente en las ciencias sociales no favorece necesariamente tal enfoque. De ahí que también se requiera un cambio en la filosofía de las ciencias sociales. Los partidarios extremados del “cientismo” favorecen únicamente la investigación empírica de “lo que es”, y consideran cualquier incursión en el campo de “lo que debe ser”, como no científica. La fórmula positivista de Pareto dirige el estudio lógico experimental, sólo a la primera área (de “lo que es”). Nadie niega significación a los estudios empíricos de las condiciones y relaciones sociales existentes, pues es fundamental para cualquier enfoque científico; pero, ha llegado el tiempo en que los sociocientistas y su pensamiento racional han llegado a ser esenciales para modelar el futuro. Se han hecho intentos, titubeantes, con las nuevas tendencias de la “sociología aplicada” y de las “ciencias del comportamiento”, pero, el principal problema que se plantea es el de los intereses que un sociocientista debe o puede servir; es un problema de compromiso moral dentro de las ciencias sociales.

Un gobierno compuesto sólo de expertos e intelectuales, de académicos y científicos se inscribe por supuesto, en una tendencia peligrosa que puede conducir a un nuevo tipo de sociedad aristocratizante; pero, es igualmente peligroso un gobierno que carece de la ayuda de los expertos, de los académicos y de los sociocientistas en sus campos respectivos; más aún, tal gobierno en nuestros tiempos, resulta ya imposible por lo menos dentro de un marco democrático efectivo, para aquellas naciones que intentan controlar su destino o desplazarse en el sentido de su mejoramiento social y político.